



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

RESOLUCIÓN

Exp.: 039/2021

Archivo de las actuaciones con adopción de medidas

Fecha entrada: 22/07/2021

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 22 de junio de 2021 se recibe en la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación de AAA "contra Procedimiento Ordinario 467/2020 Procedimiento origen Ord Procedimiento Ordinario 293/2020 en Juzgado de Primera Instancia BBB y otras materias", figurando su denuncia escrita a mano e ilegible y aportándose de igual forma determinados escritos dirigidos al Juzgado.

Segundo.- Por acuerdo de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, fechado el 12 de julio de 2021, se traslada al denunciante que "[d]el análisis de la documentación aportada no se desprende que, en el presente caso, el conocimiento de la cuestión planteada corresponda a la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de la valoración que pueda realizar la mencionada Autoridad de control". Tras citar el artículo 236 nonies, apartado 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se señala que "de acuerdo con lo previsto en el Convenio suscrito, en fecha 6 de julio de 2017, sobre colaboración en el ejercicio de las funciones propias de las Autoridades de control en materia de protección de datos, se procede a remitir su escrito al Consejo General del Poder Judicial, al que podrá dirigirse para todas las cuestiones relacionadas con el mismo". El expediente remitido por la Agencia Española de Protección de Datos tiene entrada en el Registro general de este órgano constitucional el día 22 de julio de 2021.

Tercero.- Mediante comunicación de fecha 18 de noviembre de 2021 del Director de Supervisión y Control de Protección de Datos se solicitó al reclamante que aportase el escrito de denuncia de forma legible y aclarase los extremos en los que consideraba se había vulnerado la normativa de protección de datos de carácter personal, en el plazo de diez días.

Recibida dicha comunicación por el reclamante en fecha 22 de noviembre de 2021, el día 2 de diciembre de 2021 tuvo entrada en el Registro



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

general del Consejo General del Poder Judicial el escrito de denuncia mecanografiado, en el que se expone lo siguiente:

"En los autos de juicio ordinario nº 467/2020 ante el Juzgado de Primera Instancia de BBB, fui citado, fehacientemente, para comparecer en calidad de testigo al acto de juicio a celebrar el día 3 de junio de 2021. En la citación recibida, que adjunto, consta debidamente mi nombre completo y mi domicilio.

Al recibir la citación, observé que ni conocía, ni he tenido relación alguna, en absoluto, ni con la parte actora, ni con la parte demandada, lo que me extrañó ya que en un procedimiento civil son las partes quienes proponen los testigos en defensa de sus intereses.

Tras diversas vicisitudes que no son del caso, finalmente, recibí una llamada telefónica, al parecer del Juzgado de Primera Instancia de BBB y en todo caso, por una persona que no se identificó, quien me manifestó escuetamente que no era necesaria mi presencia al acto de juicio. Dado que no se me entregó ningún justificante documental que me eximiera de mi presencia como testigo, tuve que acudir el día 3 de junio de 2021 al referido Juzgado de Primera Instancia BBB, en donde se me indicó que mi citación como testigo, había sido un error.

Intenté obtener una explicación de dicho error y en especial al hecho de que conociesen y constasen en el referido expediente judicial civil mis datos personales y mi domicilio particular, sin conseguir explicación alguna, más allá de la alegación genérica de la existencia de una simple equivocación.

Es por ello, que solicito se proceda a una investigación sobre si se ha vulnerado la normativa de protección de mis datos de carácter personal. Es cierto que en relación a la protección de datos en expedientes judiciales, podrán ser objeto del tratamiento todos aquellos sujetos que estén relacionados con el expediente disciplinario en cuestión, esto es, denunciantes y denunciados, jueces y magistrados sobre los que exista un expediente disciplinario, testigos, fiscales y otras partes del proceso, pero en mi caso no ostento realmente ninguna de dichas cualidades. De igual modo, los preceptos legales que justifican el acceso a los datos personales se asientan en el tratamiento de los datos necesarios para cumplir una obligación legal por parte de los responsables del tratamiento, lo que tampoco se da en el presente caso.

Todo ello determina que puede haberse producido una violación de la seguridad de mis datos personales, entendida como la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos, de acuerdo al artículo 4, apartado 12 del Reglamento General de Protección de Datos.

Así las cosas, por el presente escrito y documentos adjuntos, y a su tenor, intereso se abra un expediente a fin de determinar las circunstancias que motivaron que mis datos personales consten indebidamente en los referidos autos de juicio ordinario nº 467/202 del Juzgado de Primera Instancia de BBB, así como establecer quien es el responsable de esta vulneración de mi intimidad, a efectos de delimitar posibles sanciones, todo ello con reserva de mis derechos a exigir las indemnizaciones oportunas en defensa de mis legítimos intereses".



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Cuarto.- Mediante comunicación de fecha 9 de diciembre de 2021 se solicitó información sobre los hechos a que se refiere la reclamación al Juzgado de Primera Instancia de BBB, teniendo entrada en el Registro general del Consejo el día 21 de diciembre de 2021 el informe interesado, suscrito por la Letrada de la Administración de Justicia de dicho órgano judicial, en el que se señala lo siguiente:

"En este órgano se siguieron autos de juicio ordinario 467/20. Celebrada audiencia previa, se acuerda dar efectividad a la prueba admitida, la cual incluía, entre otras, la citación de testigo solicitado por la parte demandada. Dicho testigo, efectivamente, nada tiene que ver con el reclamante, AAA.

Finalmente se señala fecha de juicio para el 03/06/2021, librando las oportunas cédulas de citación a los testigos y peritos que habían de intervenir. Por mero error humano, entre tales cédulas de citación se incluyó una dirigida al señor AAA. Señalar que el funcionario encargado del procedimiento en ese momento era tramitador interino de reciente incorporación. A esto debe añadirse la elevada carga de trabajo que se soporta en este órgano judicial. Viendo que se indica otro procedimiento en la parte superior de la cédula, ha de suponerse que el tramitador utilizó un modelo de otro expediente en el que se citaba al ahora afectado y por error terminó notificando dicha citación.

En cualquier caso, advertido el error, en fecha 27/05/21 se dicta diligencia de ordenación en la que se dispone que "revisadas las actuaciones, y apreciado que por error se citó como testigo a D. AAA para el juicio del próximo 3 de junio de 2021, se anula y se deja sin efecto la misma, debiéndose comunicar al mismo la anulación". Dado que desde la recepción de la citación el 23/3/21, el señor AAA ha venido acudiendo a esta oficina judicial y presentando escritos, se disponía de su teléfono, por lo que ha sido reiterada y debidamente informado del error sucedido, tanto sede judicial, como telefónicamente.

Finalmente y en cuanto a la posible vulneración de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, la cédula remitida al señor AAA, incluye expresamente la siguiente mención: "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes".

En definitiva, la citación efectuada constituyó un mero error humano completamente comprensible. Y, en cualquier caso, los derechos del afectado se encuentran debidamente salvaguardados, al advertirse a los posibles destinatarios de la cédula que le hacía referencia de la prohibición de hacer uso ilegítimo de tales datos conforme a la legislación sobre protección de datos."



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Con arreglo a lo prevenido en el artículo 2.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, *"[e]l tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de que sean competentes, así como el realizado dentro de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables"*. En este sentido, el artículo 236 nonies, apartado primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción vigente hasta el día 15 de junio de 2021, establecía que *"[l]as competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (en la actualidad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial"*.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 236 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, vigente desde el día 16 de junio de 2021, fecha en la que esta última entró en vigor, establece que *"[e]l tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales"*. Igualmente da nueva redacción la referida Ley Orgánica 7/2021 al artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo apartado primero establece las funciones que corresponden al Consejo General del Poder Judicial respecto a las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los Juzgados y Tribunales y las Oficinas judiciales, entre las que se encuentran la supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales mediante el ejercicio de la labor inspectora (letra a) y la tramitación de las reclamaciones interpuestas por los interesados, informándose al reclamante sobre el curso y resultado de la reclamación en un plazo razonable, previa realización de la investigación oportuna si se considera necesario (letra e).

Segundo.- La competencia del Consejo General del Poder Judicial en materia de protección de datos personales se ejerce, por tanto, respecto de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

los tratamientos de datos efectuados con fines jurisdiccionales, que vienen caracterizados, con arreglo a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 236 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción anterior a la Ley Orgánica 7/2021, por la incorporación de los datos a los procesos de que conozcan los tribunales y por estar relacionada su finalidad directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Tras la entrada en vigor de la citada ley orgánica, el precepto correlativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial es el apartado primero del artículo 236 bis, a cuyo tenor "*[t]endrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional*".

Con arreglo a lo previsto en el artículo 236 nonies LOPJ, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2021, las competencias que de acuerdo con lo establecido en el artículo 236 octies, corresponden a la autoridad de protección de datos personales con fines jurisdiccionales serán ejercidas, respecto del tratamiento de los mismos realizados por Juzgados y Tribunales, por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 3/2018, "*[l]a Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia*". El principio de colaboración entre las referidas instituciones se plasma asimismo en el apartado 3 del artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2021. El apartado 4 de este mismo precepto, con similar redacción a la del artículo 236 nonies, apartado 3, en la redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2021, establece que "*[c]uando con ocasión de la realización de actuaciones de investigación relacionadas con la posible comisión de una infracción de la normativa de protección de datos las autoridades competentes a las que se refieren los apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de otra autoridad, darán inmediatamente traslado a esta última a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento*".

En el presente caso, los hechos denunciados se refieren a la remisión de una cédula de citación, para comparecer a un juicio como testigo, a una persona ajena al procedimiento judicial -el reclamante-, obrando en la cédula



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

los datos de las partes del proceso, a los que ha tenido acceso, por tanto, el reclamante. Se dan, por tanto, los elementos caracterizadores de los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales, siendo competente para su conocimiento el Consejo General del Poder Judicial y ajustado a los preceptos transcritos sobre colaboración entre autoridades de protección de datos el traslado efectuado por la Agencia Española de Protección de Datos.

Cuarto.- Con arreglo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuya entrada en vigor se produjo el día 7 de diciembre, día siguiente al de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado', la Agencia Española de Protección de Datos *"inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos de carácter personal, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción"*.

En el marco de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial tiene asignadas como autoridad de control en materia de protección de datos de carácter personal, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad a trámite de la reclamación formulada. En este sentido, no concurriendo ninguna de las causas de inadmisión establecidas en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el marco de las actuaciones previas de investigación a que se refiere el artículo 67 de la misma, se ha recabado información al órgano judicial contra el que va dirigida la reclamación sobre la posible vulneración de la normativa de protección de datos personales.

Quinto.- La reclamación suscita dos cuestiones distintas: en primer lugar, el acceso del reclamante a los datos personales de las partes del procedimiento judicial, producido con ocasión de la remisión de la cédula de citación en la que obraban tales datos; y, en segundo término, al que fundamentalmente se refiere el reclamante, las circunstancias que provocaron que se accediese y se utilizasen sus datos personales en una actuación procesal que le resultaba plenamente ajena.

Respecto de la primera cuestión debe señalarse, en primer lugar, que no concurre en el reclamante la condición de interesado al que se habilita en el Reglamento 2016/679 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento general de protección de datos) para la presentación de reclamaciones ante la autoridad de control (considerando 141 y artículos 57.1; 12.4; 14.2 y 15.1, entre otros). Así se desprende inequívocamente de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

las definiciones contenidas en los números 1 y 10 del artículo 4 RGPD. El primero define los "datos personales" como *"toda información sobre una persona física identificada o identificable ('el interesado')..."*; y el segundo entiende por "tercero" a *"toda persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado"*.

Como es sabido, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sustituye en numerosos de sus preceptos el término "interesado" del Reglamento General de Protección de Datos por el de "afectado", si bien la caracterización que hace del mismo coincide con la de aquel (artículos 11; 12.2; 28.2; 37.1 y 2; 63 y 64.2, entre otros).

Resulta claro que los datos personales afectados no son los propios del reclamante, sino los de otras personas que figuran en el procedimiento judicial, una persona física (la demandante) y otra jurídica (la demandada). A estos efectos se trata, por tanto, de un "tercero" y no del "interesado" o "afectado" al que los cuerpos normativos citados facultan a presentar una reclamación cuando entienda que se ha producido una vulneración de la normativa de protección de datos personales.

En definitiva, respecto de esta cuestión no estamos frente a una reclamación en materia de protección de datos interpuesta por quien está habilitado para ello, sino ante una denuncia en sentido propio. Y a diferencia de otros ámbitos que atribuyen *ex lege* al denunciante la condición de interesado como consecuencia del carácter público de la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales contencioso-administrativos la observancia de la correspondiente legislación sectorial, en materia de protección de datos no existe la acción pública, por lo que la única virtualidad de la denuncia es la promover, en su caso, la actuación administrativa de oficio.

Las normas generales sobre los procedimientos administrativos son aplicables con carácter subsidiario en los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos (artículo 63.2 de la Ley Orgánica 3/2018). Pues bien, con arreglo a lo prevenido en el artículo 62.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, *"[s]e entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone*



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento sancionador”.

En el presente punto se trata, por tanto, de determinar, respecto de esta primera cuestión, en qué medida la información aportada por el reclamante justifica la realización por el Consejo General del Poder Judicial, como autoridad de control, de actuaciones en un procedimiento de posible vulneración de la normativa de protección de datos, debiendo ser necesariamente negativa la respuesta a la vista de lo expuesto en la reclamación y de la información remitida por el órgano judicial. En este sentido, es especialmente relevante el hecho de que únicamente el denunciante podría haber hecho un uso inadecuado de los datos personales ajenos que le habían sido trasladados erróneamente, debiendo destacarse al respecto que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 236 quinquies, apartado 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2021, similar al contenido con anterioridad en el apartado 2 de este mismo artículo, “[l]os datos personales que las partes conocen a través del proceso deberán ser tratadas por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento”. Es claro que dicho precepto resulta de aplicación al reclamante, aun cuando carezca de la condición de parte procesal y los datos personales a los que ha tenido acceso le hayan sido puestos de manifiesto por error.

Sexto.- En lo que respecta a la segunda de las cuestiones que se indicaban, de la información aportada por el órgano judicial se desprende que el origen de la utilización indebida de los datos personales del reclamante en la cédula de citación a juicio como testigo se debió a que el funcionario de la oficina judicial que debía realizar una citación a juicio como testigo a otra persona, merced a la admisión de esta prueba en el procedimiento ordinario 467/20, utilizó como modelo una citación de otro expediente judicial en el que se citaba al reclamante, a quien por error se citó finalmente en un procedimiento judicial que le resultaba ajeno.

De las actuaciones practicadas no resulta que los datos personales del reclamante hayan sido utilizados para ninguna otra finalidad ni hayan tenido otra difusión. Por lo demás, según lo informado, una vez advertido el error, se dejó constancia del mismo en el procedimiento mediante diligencia de ordenación, en la que se incluía la comunicación al reclamante de la anulación



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

de la citación, la cual se produjo en las circunstancias que han quedado expuestas en los antecedentes.

En el informe del órgano judicial se califica lo sucedido con la cédula de citación en cuestión como un error humano, aludiendo a las circunstancias de la reciente incorporación del funcionario interino que se había encargado en ese momento en el procedimiento, así como a la elevada carga de trabajo que soporta el órgano judicial. En este punto debe recordarse lo que el Consejo General del Poder Judicial, actuando como autoridad de control en materia de protección de datos, ha señalado reiteradamente con ocasión del conocimiento de anteriores reclamaciones, en el sentido de que, aun siendo consciente de la carga de trabajo que los órganos judiciales soportan y de las dificultades que ello supone en múltiples ocasiones para la práctica de diligencias y actuaciones de las oficinas judiciales, en especial en circunstancias como las que afectan al presente caso, puestas de manifiesto en el informe del órgano judicial, en el marco de la función que tiene atribuida para el señalamiento de las medidas que deben ser adoptadas para evitar situaciones como la que se ha puesto de manifiesto en este expediente, ha enfatizado la necesidad de prevenir este tipo de errores mediante técnicas organizativas que supongan la realización efectiva de las comprobaciones previas que sean precisas, contribuyendo así a que no se vean afectados los derechos y principios de la normativa de protección de datos personales en los tratamientos que de ellos se realizan en las actuaciones procesales.

Séptimo.- Habiendo quedado delimitados los hechos denunciados en la reclamación presentada y en el informe del órgano judicial, no procede llevar a cabo ulteriores actuaciones de investigación en relación con los mismos. Tomando en consideración las medidas ya adoptadas y aquellas otras que se señalan en el anterior fundamento jurídico, procede decretar el archivo del expediente.

Por lo expuesto,

ACUERDO

1.- Archivar las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación formulada por AAA frente al Juzgado de Primera Instancia de BBB, registrada con el número de expediente 039/2021, con la adopción de las medidas señaladas en el fundamento jurídico sexto.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

2.- Trasladar la presente resolución a la Agencia Española de Protección de Datos, a los fines previstos en el apartado 4 de la cláusula segunda del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos el 6 de julio de 2017, sobre colaboración en el ejercicio de las funciones propias de las autoridades de control en materia de protección de datos.

3.- Notificar la presente resolución a AAA y al Juzgado de Primera Instancia de BBB.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Firmado digitalmente
José Luis Gisbert Iñesta
Director de Supervisión y Control de
Protección de Datos (e.f.)